

Sección latinoamericana

ASUNTOS GENERALES

La diplomacia del dólar (segunda parte)

En la primera parte de esta nota, publicada en el número de septiembre de *Comercio Exterior*, se presentó un breve repaso de la política estadounidense hacia América Latina, desde el inicio de la vida independiente de la región hasta el final del régimen de James Carter. Ahí se señaló que las relaciones económicas, políticas y militares entre ambas partes del continente han tenido frecuentes cambios debido tanto a las modificaciones ocurridas en la escena internacional como a las coyunturas particulares de Estados Unidos y de los países latinoamericanos. Sin embargo, dichas relaciones conservaron, en lo esencial, su naturaleza asimétrica, en detrimento de América Latina.

También se apuntó que en el marco de la crisis que afecta al mundo desde 1970, Estados Unidos ha perdido parte de su

influencia económica, política y militar en América Latina, al tiempo que se han agudizado las contradicciones socioeconómicas y políticas en los países latinoamericanos. Esto último se ha manifestado en la imposición de regímenes autoritarios y, al mismo tiempo, en la expansión y consolidación de movimientos populares y gobiernos nacionalistas, lo que ha complicado aún más la de por sí compleja trama de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

Para impedir que la pérdida de la hegemonía estadounidense sobre la región pudiera vulnerar la seguridad de su país, Carter propuso, a lo largo de su campaña electoral de 1976, un cambio en la actitud de la diplomacia para borrar la imagen de unos Estados Unidos aliados a los gobiernos autoritarios y a los regímenes militares y la necesidad de una visión globalista de los problemas del Tercer Mundo en general y de América Latina en particular. Al mismo tiempo, formuló una política sustentada en la defensa de los derechos humanos y en "principios morales selectivos", que guió la política exterior de su gobierno.

Sin embargo, durante los cuatro años que duró en el cargo, su conducción de la política exterior fue cuestionada tanto por demócratas como por republicanos. Para los primeros, esos postulados no representaban una base sólida sobre la cual es-

tablecer lineamientos políticos más o menos permanentes; para los segundos, identificados con los sectores más conservadores de Estados Unidos, los acontecimientos en América Latina ponían de manifiesto la debilidad del régimen de Carter para impedir el "avance del comunismo" y hacían evidente el retroceso de la influencia estadounidense en el continente. Para estos sectores, el triunfo de la Revolución sandinista en Nicaragua, la creciente inestabilidad política en los países centroamericanos, los experimentos socialistas en Jamaica y Granada y la supuesta presencia de tropas soviéticas en Cuba eran los principales indicadores de la incapacidad del régimen demócrata en la salvaguardia de los intereses y la seguridad nacionales.

El deterioro de la imagen de Carter llegó a su clímax cuando intentó reformular muchos de sus planteamientos originales, como fue el caso de su política hacia el Caribe y Centroamérica, al anunciar medidas como dar prioridad a la ayuda militar sobre la económica y constituir una *task force* militar para impedir "el avance del comunismo" en esas áreas.

No obstante esas medidas, diversos grupos presionaron al Presidente y lo alejaron cada vez más de sus propuestas originales, lo que aumentó la debilidad de Carter y agudizó las fricciones en el seno de su equipo ministerial, poniendo en evi-

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., sino en los casos en que así se manifieste.

dencia el fracaso de la llamada "diplomacia colegiada".

En este ambiente se realizó la campaña electoral de 1980, que sirvió de escenario para que la población estadounidense favoreciera las posiciones más conservadoras, encabezadas por el Partido Republicano.

Evolución de la campaña

Para quienes siguieron de cerca la evolución política de Estados Unidos durante el período 1976-1980, el triunfo del Partido Republicano no fue una sorpresa. Ya en las elecciones de representantes, gobernadores y asambleas legislativas estatales de 1978 los republicanos habían reducido la ventaja de los demócratas, a causa de las dificultades económicas y políticas internas que el gobierno de Carter afrontó casi permanentemente.¹

Ese revés electoral debilitó la posición de Carter, tanto en el Partido Demócrata como ante la opinión pública, al grado que en 1979 Edward Kennedy pudo competir con él por la candidatura presidencial para las elecciones de noviembre de 1980. Varios sucesos en el plano internacional (la toma de la embajada estadounidense en Irán, la intervención soviética en Afganistán, el derrumbe de la dictadura somocista en Nicaragua y la creciente inestabilidad política en Centroamérica) desplazaron la atención del electorado de los problemas internos, lo que permitió a Carter asegurar su nominación no sin que mediara una intensa negociación con el grupo encabezado por Kennedy.

El Partido Republicano se presentó ante la opinión pública consolidado y unificado en torno a las posiciones más conservadoras. Entre éstas destaca el informe elaborado en mayo de 1980 por el Comité de Santa Fe, por encargo del Consejo para la Seguridad Interamericana, que influyó decisivamente en la designación de Reagan como candidato presidencial del Partido Republicano.²

1. Véase "La elección presidencial de 1980, un balance de posiciones y fuerzas", en *Cuadernos Semestrales, Estados Unidos: perspectiva latinoamericana*, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), núm. 9, México, 1981, p. 20.

2. Véase Roger Fontaine et al., "Las relaciones interamericanas: escudo de la seguridad del nuevo mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos", en *Cuadernos Semestrales*. . . , op. cit., pp. 181-213.

Dicho informe fue preparado por un equipo de especialistas en asuntos latinoamericanos, coordinado por Roger W. Fontaine, y sirvió después para normar los criterios de política exterior de la plataforma republicana. Antes de reproducir las recomendaciones del informe para la política hacia América Latina, conviene transcribir algunos de los supuestos y premisas sobre los que se elaboró.

Según el equipo de Fontaine, "El continente americano se encuentra bajo ataque. América Latina, la compañera y aliada tradicional de Estados Unidos, está siendo penetrada por el poder soviético. La cuenca del Caribe está poblada por apoderados soviéticos y delimitada por estados socialistas".

"Históricamente, la política de Estados Unidos hacia América Latina nunca ha estado separada de la distribución global del poder, y no hay razones para pensar que lo que suceda en la década de los ochenta entre los mayores estados en un área del mundo no afectará las relaciones de poder en los otros continentes. La Doctrina Monroe, piedra angular histórica de la política de Estados Unidos hacia América Latina, reconocía la íntima relación de la lucha por el poder entre el Viejo y el Nuevo Mundo."

Después de recordar los principios fundamentales de dicha doctrina, el informe señala que "la proyección del poder global de Estados Unidos descansa sobre un Caribe cooperativo y una América del Sur que brinde su apoyo. . . No podemos permitir que se desmorone ninguna base de poder, ya sea en América Latina, en Europa Occidental o en el Pacífico Occidental, si queremos que Estados Unidos retenga la energía adicional necesaria para desempeñar un papel equilibrador en otras partes del mundo. . . Estados Unidos debe mejorar su posición relativa en todas sus esferas de influencia. Si se pierde firmeza con respecto a la importancia de mejorar la posición relativa de poder de una nación, será entonces sólo cuestión de tiempo que el Estado inactivo sea remplazado por su competidor."

Para los miembros del Comité de Santa Fe, en el decenio de los ochenta Estados Unidos está siendo desplazado del Caribe y de Centroamérica por un "superpoder extracontinental" (la Unión Soviética), por lo que "debe remediar esta situación".

En el informe se afirma que esta situación se originó a principios de los años sesenta, a raíz del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos (1961) y del acuerdo Kennedy-Khrushov sobre los cohetes balísticos colocados en Cuba (1962). Luego, durante la guerra en Viet Nam, Estados Unidos perdió influencia a causa de la posición adoptada por Washington, según la cual "América Latina no era importante estratégica, política, económica ni ideológicamente". El proceso de erosión de la hegemonía estadounidense en América Latina culminó cuando el régimen de Carter aplicó las políticas recomendadas por la Comisión para las Relaciones Estados Unidos-América Latina y el Instituto de Estudios Políticos.

Los informes de esas entidades planteaban la necesidad de emprender ciertos cambios básicos en las relaciones entre ambas partes del continente, por los siguientes motivos: "a) Que la seguridad militar no necesitaba ser el objetivo dominante ni el principio ordenador para la política de Estados Unidos en América Latina. b) Que Estados Unidos no debería continuar la política de aislamiento de Cuba. c) Que el apoyo material de Cuba a los movimientos subversivos en otros países latinoamericanos ha disminuido en los años recientes. d) Que Estados Unidos debería poner fin al embargo comercial a Cuba. e) Que un nuevo acuerdo equitativo con Panamá acerca del Canal podría servir a los intereses de Estados Unidos no sólo en Panamá sino en toda América Latina." También se planteaba la necesidad de "provocar una actitud receptiva de Estados Unidos hacia los modelos socialistas prosoviéticos de desarrollo económico y político" en Jamaica y Guyana.

En el Informe del Comité de Santa Fe se señala que "Estados Unidos está cosechando las consecuencias de dos décadas de negligencia, miopía y autoengaño", y que "la política de Estados Unidos se encuentra en desorden", pues las normas del conflicto y el cambio social adoptadas por Carter son las mismas de la Unión Soviética. También se dice "que el área en disputa es territorio soberano de aliados de Estados Unidos y de socios comerciales que pertenecen al Tercer Mundo, que la esfera de la Unión Soviética y sus apoderados se está expandiendo, y que el balance anual de ganancias y pérdidas favorece a la URSS".

Para invertir esta situación, "Estados Unidos debe presionar en favor de una so-

lución inventiva, creativa y estratégica." La intervención de Estados Unidos en el extranjero sólo se justifica si responde a problemas de seguridad, y no es legítima si su fin es confirmar un orden particular en cualquier otro país, "a menos que estas actividades se vincularan con una amenaza extracontinental". "Estados Unidos puede otorgar esta misma perspectiva nacionalista a todas las naciones de América Latina que no tengan una relación de semivasallaje con una superpotencia extracontinental. Tal conexión semicolonial introduce un intervencionismo esterilizante en la cultura y en los países del hemisferio occidental y socava una política latinoamericana basada en la reciprocidad.

"Estados Unidos debe desarrollar una política hacia América Latina que fomente la seguridad estadounidense e iberoamericana; que se base en la independencia nacional mutua y en la dependencia interamericana; que promueva el desarrollo económico y político autónomo basado en nuestra herencia cultural y religiosa; que acepte límites a los impulsos estadounidenses para promover reformas internas en Iberoamérica y que reconozca y respete la seguridad y sensibilidad de nuestros vecinos." Sólo una política dirigida a preservar la paz, promover la producción y lograr la estabilidad política "puede salvar al nuevo mundo y garantizar la posición global de poder de Estados Unidos, la cual descansa sobre una América Latina segura y soberana".

Las propuestas del informe del Comité de Santa Fe se dividen en cinco capítulos. El primero se refiere a "la amenaza militar externa"; el segundo, a "la subversión interna"; el tercero, a "las políticas económicas y sociales"; el cuarto, a "los derechos humanos y el pluralismo ideológico", y el quinto, a "las relaciones interamericanas".

Para contener "la amenaza militar externa", el Comité propuso: a) "revitalizar el sistema de seguridad hemisférico, apoyando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y asumiendo el liderazgo en la Junta Interamericana de Defensa, a fin de apoyar la larga lista de resoluciones dirigidas a incrementar la seguridad del hemisferio contra las amenazas externas e internas"; b) "estimular acuerdos de seguridad regional que contribuyan a mantenerla, tanto en lo hemisférico como en lo regional, contra las amenazas externas e internas"; c) "reactivar, como el tercer elemento de nuestro sistema hemisférico de seguridad, nuestras tradi-

cionales vinculaciones militares en el continente, ofreciendo entrenamiento militar y ayuda a las fuerzas armadas del continente americano, con un énfasis particular en los oficiales más jóvenes y en los suboficiales; ofrecer ayuda técnica y psicológica a todos los países de este hemisferio en su lucha contra el terrorismo, independientemente del origen de este último"; d) "si los tratados actuales fracasan, colocar al Canal de Panamá bajo la protección de la Junta Interamericana de Defensa, con objeto de asegurar que las naciones de este hemisferio tengan un acceso libre y justo a las cuencas del Atlántico y el Pacífico."

Con respecto a la subversión interna, las propuestas son las siguientes:

1) "La política estadounidense en América Latina debe reconocer la vinculación integral entre la subversión interna y la agresión externa. La Doctrina Roldós, denominada así en honor del Presidente de Ecuador, debe ser condenada. Plantea que las potencias extranjeras no violan el principio tradicional de la no intervención si su participación en los asuntos internos de una nación constituye una defensa de los derechos humanos." Según el Comité, el gobierno de Carter se apoyó en esta doctrina para atacar a los gobiernos anti-comunistas (los de Somoza, Stroessner, etc.) por "supuestas violaciones a los derechos humanos".

2) La política estadounidense debe hacer caso omiso de la propaganda que aparezca en los medios de comunicación generales y especializados, inspirada por fuerzas hostiles a Estados Unidos.

3) "La política exterior de Estados Unidos debe empezar a contrarrestar (no a reaccionar en contra) la teología de la liberación, tal como es utilizada en América Latina por el clero a ella vinculada."

4) "Estados Unidos debe rechazar la suposición errónea de que, frente a los gobiernos autoritarios, puede desarrollar e imponer fácilmente opciones democráticas al estilo estadounidense, así como dejar de lado la convicción igualmente conflictiva de que, en tales situaciones, el cambio *per se* es inevitable, deseable y de interés para Estados Unidos. Esta creencia ha inducido a la administración de Carter a participar activamente en el derrocamiento de gobiernos autoritarios no comunistas, a la vez que adoptaba una posición pasiva frente a la expansión comunista."

5) "La política de derechos humanos, que constituye un concepto cultural y políticamente relativo que la presente administración [la de Carter] ha utilizado para intervenir a favor del cambio político en algunos países de este hemisferio, afectando de manera adversa la paz, la estabilidad y la seguridad de la región, debe ser abandonada y remplazada por una política no intervencionista de realismo político y ético."

Acerca de "los derechos humanos y el pluralismo ideológico", el Comité propuso:

1) "Estados Unidos debería cesar de dirigir contra sus aliados su programa actual de derechos humanos, que se aplica de modo inequitativo."

2) "Estados Unidos debería aplicar la doctrina del pluralismo ideológico a todo el espectro político, no sólo a los regímenes internacionalistas de izquierda."

Por último, se citan las propuestas referentes a "las relaciones interamericanas":

1) "Estados Unidos debe consagrar una atención particular a tres naciones —Brasil, México y Cuba—, en virtud de su especial importancia en el hemisferio occidental.

2) "Estados Unidos debería anunciar públicamente una política de estímulo a la adquisición y uso apropiados y razonables de tecnología avanzada por Brasil, incluso el uso pacífico de la energía nuclear. . . No debe hacer comentarios públicos sobre los derechos humanos en Brasil y debe abrogar el requerimiento impuesto por el Congreso de informar sobre la condición de los derechos humanos en países amigos y aliados. . . Además. . . debería estimular activamente el acercamiento entre Argentina y Brasil, ya que abre muchas posibilidades para el desarrollo económico rápido del Cono Sur, que ayudará a estimular el crecimiento de los países periféricos (Bolivia, Paraguay, Uruguay).

3) "Estados Unidos debería iniciar inmediatamente pláticas interrelacionadas de alto nivel acerca de los energéticos, la inmigración y el comercio. Se debería eliminar la embajada especial para asuntos mexicanos y la Embajada de Estados Unidos en México debería encabezar la delegación en las negociaciones. Estados Unidos debería mantener sus mercados abiertos a los productos mexicanos. La meta no es el establecimiento de un mercado común en América del Norte sino

mantener abierto el mercado estadounidense para los bienes mexicanos, particularmente aquellos que provienen de industrias intensivas en mano de obra.

"Estados Unidos y México deberán buscar una solución al flujo de trabajadores indocumentados a Estados Unidos. La meta es proporcionar empleo temporal para un número determinado de ciudadanos mexicanos. La aplicación estricta de la cuota será responsabilidad tanto de las autoridades mexicanas como de las estadounidenses.

"Estados Unidos y México deben elaborar acuerdos de largo plazo para el abastecimiento de gas y petróleo. La meta para las importaciones estadounidenses de petróleo es alrededor de dos millones de barriles diarios para principios del decenio de los ochenta. Tal acuerdo podría beneficiar a ambos países. Para Estados Unidos... la importación de petróleo mexicano, junto con compras mayores a otros productos del hemisferio occidental, aliviaría su dependencia del petróleo del Golfo Pérsico para 1985.

4) "Estados Unidos debe lanzar una nueva política positiva para el Gran Caribe, incluida Centroamérica. Esa política proporcionará una ayuda múltiple para todos los países amigos atacados por minorías armadas que reciben asistencia de fuerzas externas hostiles. El programa combinará los elementos más exitosos de la Doctrina Truman y de la Alianza para el Progreso. Asimismo, Estados Unidos reafirmará el principio fundamental de la Doctrina Monroe: que no se permitirá a ninguna potencia hostil el establecimiento de bases o de alianzas militares y políticas en la región...

"Estados Unidos ya no puede aceptar el *status* de Cuba como estado vasallo de los soviéticos. Hay que calificar a la subversión cubana claramente como tal, y hay que resistirla. El precio que La Habana debe pagar por tales actividades no debe ser bajo. Estados Unidos sólo puede restaurar su credibilidad si toma una acción inmediata. Los primeros pasos deben ser francamente punitivos. Los diplomáticos cubanos deben irse de Washington. Hay que reanudar la exploración aérea. Hay que cortar los dólares de los turistas estadounidenses. Hay que reevaluar el acuerdo de pesca de 1977, altamente ventajoso para la flota de pesca cubana.

"Estados Unidos debe ofrecer a los cu-

banos opciones claras. Primero, debe quedar claro al gobierno cubano que, si sigue como en el pasado, se tomarán otras medidas apropiadas."

Estas tesis aparecen resumidas en la Plataforma del Partido Republicano.³

Así, en el capítulo de "Política exterior" se señala que: "América Latina es un área de interés primario para Estados Unidos", aunque durante el gobierno de James Carter las relaciones con los países latinoamericanos declinaron rápidamente. "Las naciones de América del Sur y Centroamérica han sido golpeadas por las sanciones diplomáticas y económicas de la administración de Carter, unidas a las acusaciones indiferenciadas de violaciones de derechos humanos."

Respecto al Caribe y Centroamérica, los republicanos acusaron al gobierno de Carter de mantenerse al margen, al tiempo que "la Cuba totalitaria de Castro, financiada, dirigida y abastecida por la Unión Soviética, entrena, arma y apoya agresivamente a las fuerzas del enfrentamiento y la revolución en el Hemisferio Occidental... Deploramos la toma de Nicaragua por los marxistas-sandinistas, así como los intentos marxistas por desestabilizar a El Salvador, Guatemala y Honduras. No apoyamos la ayuda de Estados Unidos a cualquier gobierno marxista en este hemisferio y nos oponemos al programa de ayuda de la administración de Carter para el gobierno de Nicaragua. Sin embargo, apoyaremos los esfuerzos del pueblo de Nicaragua para establecer un gobierno independiente y libre."

Más adelante se afirma que "los republicanos reconocemos la importancia de nuestras relaciones en este hemisferio y nos comprometemos a una nueva y vigorosa política de Estados Unidos en el Continente Americano... Retornaremos al principio fundamental de tratar a un amigo como tal y a los autoproclamados enemigos como tales, sin disculpas. Dejaremos claro a la Unión Soviética y a Cuba que la subversión y el incremento en las fuerzas militares ofensivas es inaceptable."

Luego la plataforma se refiere a las relaciones con México, país al que "reconocemos fundamental importancia", con el

3. Véase "Selección de la Plataforma del Partido Republicano en materia de política exterior", en *Cuadernos Semestrales*. . . , *op. cit.*, pp. 273-300.

cual se buscará "solucionar problemas comunes sobre la base del interés mutuo y reconociendo que cada país tiene contribuciones únicas que hacer en la resolución de problemas prácticos", y con Panamá, para afirmar su compromiso de que "el Canal de Panamá permanezca abierto, seguro y libre de control hostil".

Huelga señalar que, mucho antes de publicados estos documentos, varias personalidades académicas conservadoras difundieron en diversos diarios estadounidenses diagnósticos sobre la realidad de Estados Unidos y opciones políticas para "revertir el proceso de declinación" de su sociedad y para que su país recuperara un liderazgo indiscutible en el decenio de los ochenta.

En general, la respuesta que proponen los distintos autores para que Estados Unidos recupere su hegemonía en América Latina consiste en dirigir la estrategia de Washington contra un supuesto eje Moscú-La Habana y "defenderse contra un cerco de bases soviéticas dentro y alrededor de nuestra frontera sur". En esta interpretación de América Latina, dichas personalidades suscriben la llamada "teoría del dominó", según la cual el proceso revolucionario que se desarrolla en algunos países centroamericanos se extenderá a naciones más estables, como Costa Rica, México y Panamá, hasta alcanzar a Estados Unidos: "es hora de que el pueblo de Estados Unidos se dé cuenta de que en la teoría del dominó nosotros somos la última ficha." (*NBC News*, "Write paper: the Cuban connection", octubre de 1980). Varios de esos especialistas fueron designados por Reagan para ocupar cargos de responsabilidad en la conducción de las relaciones exteriores de Estados Unidos.

Algunas repercusiones en América Latina

Al asumir el poder en enero de 1981, Ronald Reagan colocó a Centroamérica en el primer plano de su política exterior. El nuevo equipo gobernante considera que los conflictos políticos en esa región son en realidad batallas de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en vez de identificar las causas de la inestabilidad en la crisis de las actuales estructuras económicas, sociales y políticas. Por ello, el régimen republicano ha concedido gran importancia a la represión de los movimientos populares, al fortalecimiento de los ejércitos locales y al reforzamiento de la hegemonía estadounidense en el istmo, mediante el

respaldo político y económico a gobiernos supuestamente democráticos, emanados de "procesos electorales".

En este contexto, adquiere relevancia la primera conferencia de prensa de Alexander Haig, luego de su designación como Secretario de Estado. El flamante funcionario afirmó que el concepto de "terrorismo internacional" tomaría el lugar del de "derechos humanos" en la nueva política exterior estadounidense. Asimismo, insistió en la "teoría del dominó", como parte de un plan de cuatro etapas del "comunismo internacional" para apoderarse de Centroamérica. Según Haig, la primera etapa se cumplió al establecerse en Nicaragua el gobierno sandinista. La segunda etapa consistiría en derrocar al régimen salvadoreño e instaurar una dictadura marxista. La tercera comprendería la derrota de los gobiernos de Honduras y Guatemala, considerados como "democráticos y amistosos", y la cuarta, la expansión del dominio comunista a Costa Rica, Panamá y, finalmente, a México.⁴

Para eliminar esa amenaza y evitar la instauración de regímenes adversos a los intereses estadounidenses, Haig subrayó que "es absolutamente indispensable detener a la subversión en El Salvador", para lo cual anunció que se intensificaría la ayuda militar a la junta democristiana encabezada por José Napoleón Duarte.

En realidad, la política de asistencia militar a la junta salvadoreña empezó a aplicarse varias semanas antes de que Carter dejara su cargo, cuando el Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA lograron que se levantara la suspensión de los envíos de equipo bélico, dictada a raíz del asesinato de cuatro religiosas estadounidenses en diciembre de 1980.

El cambio de actitud del gobierno de Carter obedeció a que la CIA informó acerca de un supuesto incremento en el tráfico aéreo y terrestre desde Nicaragua para llevar armas y pertrechos al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). En "coincidencia" con esto, unos días después de publicado el informe de la CIA, Duarte dio a conocer el desembarco de "cien mercenarios nicaragüenses" en Playa Coco.⁵

4. Véase *El Día, Uno más Uno, Excelsior*, periódicos editados en la ciudad de México, 25 de enero de 1980.

5. Véase *El Día*, México, 12 de enero de 1981.

Aunque esta operación fue desmentida por el gobierno de Nicaragua y por el FMLN, el 14 de enero de 1981 Carter autorizó el envío de material bélico por casi 10 millones de dólares y de un grupo de asesores militares para entrenar a las fuerzas armadas salvadoreñas en actividades de contrainsurgencia.

A mediados de febrero de 1981, el gobierno de Reagan inició una ofensiva diplomática anticomunista en América Latina y Europa. El Departamento de Estado envió a Vernon Walters a las capitales de los principales países latinoamericanos con copias de un documento titulado *Intervención comunista en El Salvador*.⁶ La misión de Walters era conseguir el apoyo de los gobernantes latinoamericanos para que Estados Unidos interviniera directamente en el conflicto salvadoreño, ya que el Departamento de Estado tenía "pruebas definitivas" de que "la insurgencia en El Salvador se ha transformado gradualmente en otro caso de agresión armada indirecta contra un pequeño país del Tercer Mundo por los poderes comunistas que actúan a través de Cuba". Una de las "pruebas" que destacó el Departamento de Estado era que seis países comunistas —Bulgaria, Checoslovaquia, Etiopía, Hungría, República Democrática Alemana y Viet Nam— habían prometido enviar casi 800 toneladas de armas y pertrechos al FMLN, de las cuales ya se habían entregado unas 200 a través de Cuba y Nicaragua.

Sin embargo, la gira de Walters no tuvo el éxito que se esperaba. Ningún país latinoamericano, excepto Venezuela, respaldó la intervención estadounidense en El Salvador; en cambio, surgió una inesperada oposición a la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de cualquier país latinoamericano. Sin perder el ánimo por el revés diplomático, a principios de marzo de 1981 el gobierno de Reagan anunció el envío a El Salvador de 25 millones de dólares en material bélico y 20 asesores militares.

El Departamento de Estado, haciendo caso omiso de las críticas de los miembros demócratas del Congreso, anunció la concesión de varios préstamos para ayudar a la economía salvadoreña por un total de 63.5 millones de dólares.⁷ Adicionalmen-

te, la Casa Blanca apoyó en el FMI y el BID préstamos para El Salvador por 380 millones de dólares.

La ayuda económica y militar de Reagan a la junta democristiana salvadoreña provocó una de las peores tormentas políticas en el Congreso estadounidense, ya que los demócratas denunciaron al gobierno republicano por apoyar a regímenes de facto, opuestos a la voluntad popular. Para vencer a la oposición en el Congreso y evitar movilizaciones populares en Estados Unidos contra la intervención en El Salvador, el Departamento de Estado promovió un proceso electoral tendiente a legitimar al régimen de Duarte.

El gobierno de Reagan concedió gran importancia a esas elecciones, porque constituían la expresión de los salvadoreños contra la violencia y la "penetración comunista". Sin embargo, esa iniciativa sólo facilitó un reacomodo de los militares en el poder y la agudización de las contradicciones internas en El Salvador.

En efecto, de octubre de 1981 a marzo de 1982 (cuando se realizaron las elecciones) las operaciones contrainsurgentes se intensificaron al máximo y se reprimió con lujo de fuerza a grandes núcleos de población civil, en un desesperado intento por cortar el apoyo popular a la guerrilla.

No obstante las denuncias sobre la brutalidad del ejército salvadoreño, muchas de ellas publicadas en medios de comunicación masiva estadounidenses, Reagan certificó ante los cuerpos legislativos de su país que la Junta respetaba escrupulosamente los derechos humanos, con lo que aseguró el cumplimiento de la ayuda militar y económica de Estados Unidos a Duarte, y haciendo prevalecer la concepción de que la solución a la crisis salvadoreña debía ser militar y no política.

Paralelamente, la Casa Blanca ha hecho múltiples esfuerzos para incorporar a todos los países del área a su política contrarrevolucionaria y de contención a la "influencia comunista" mediante el reforzamiento de los ejércitos locales y la formación de alianzas militares.

Así, Reagan ha hecho todo lo posible para levantar el embargo de los suministros militares de Estados Unidos al gobierno guatemalteco, impuesto en 1977 por Carter de acuerdo con la política de derechos humanos. A pesar de esos esfuerzos, al principio no se pudo concretar tal

6. Véase *El Día*, México, 10 de marzo de 1981.

7. Véase *Washington Post*, 25 de marzo de 1981.

ayuda, debido a la persistente negativa del gobierno de Guatemala a aceptar condiciones para su reanudación.

Aparentemente, los militares guatemaltecos cuestionaban los lineamientos políticos estadounidenses, pues contaban con fuentes seguras de aprovisionamiento, como Argentina, Bélgica, Israel y Sudáfrica. Además, a partir de 1981 el gobierno guatemalteco autorizó la producción de armas y municiones en el país, en empresas de capital nacional.

Sin embargo, a raíz de la unificación de las cuatro organizaciones guerrilleras guatemaltecas a principios de febrero de 1982, el Departamento de Estado presionó a los militares de aquel país para que aceptaran la ayuda militar, lo cual se logró después del golpe militar de Efraín Ríos Montt.

En cuanto a Honduras, los observadores coinciden en afirmar que constituye "la pieza clave del tablero estratégico de Estados Unidos en la región", debido a su relativa estabilidad política y a su posición geográfica, lo que permite utilizarlo como base para sus programas de hostigamiento a Nicaragua y de apoyo a los gobiernos de El Salvador y Guatemala.

En forma paralela a la ayuda militar y económica de Washington a los países de la región, la Casa Blanca, impulsó la formación de la Comunidad Democrática Centroamericana (CDCA), organización creada en San José, el 19 de enero de 1982, con la participación de Costa Rica, El Salvador y Honduras. Guatemala fue excluida, con el propósito aparente de forzar al gobierno golpista de Ríos Montt para que celebrase elecciones que lo legitimaran en el poder.

Los objetivos de la CDCA son aislar a Nicaragua y comprometer a los signatarios a defenderse de "todo tipo de intervención en los asuntos internos de las naciones centroamericanas". En la declaración conjunta de los países que la integran se solicita específicamente la ayuda financiera y económica para hacer frente a la situación económica actual, que podría convertirse en una verdadera bancarrota.

Por otra parte, la iniciativa de la Cuenca del Caribe (el programa de Reagan para el desarrollo económico de la región) es parte del esfuerzo estadounidense para garantizar las acciones militares y proteger las economías caribeñas y centroame-

ricanas.⁸ Cabe destacar que de los 350 millones de dólares de ayuda que prevé el proyecto sometido al Congreso estadounidense, 128 millones están destinados a El Salvador; 70 millones a Costa Rica, y 35 millones de dólares a Honduras. Estas cifras pueden compararse con la ayuda económica de México a los países de la región, en el marco del acuerdo petrolero de San José: 700 millones de dólares de 1980 a 1982.⁹ Puede calcularse un monto similar para la ayuda otorgada por Venezuela, el otro signatario del acuerdo.

Las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua merecen un comentario aparte. Para el Departamento de Estado, Nicaragua ocupa actualmente un papel similar al de Cuba en el decenio de los sesenta: "se trata de una nación revolucionaria gobernada por una minoría violenta, resuelta a exportar la subversión y la intervención armada a toda Centroamérica".

El punto central de la política de Washington se apoya en dos obsesiones: ver en toda decisión del gobierno sandinista las inevitables manos de Moscú y La Habana, y suponer que cualquier transformación de las estructuras socioeconómicas conduce irreversiblemente al socialismo.

De enero de 1981 a la fecha, las relaciones entre los dos países se han deteriorado progresivamente. El gobierno de Washington ha insistido en que los sandinistas han instalado en Nicaragua "una plataforma de guerra y terror" que amenaza la seguridad de toda Centroamérica, y que proveen de armas y municiones a los rebeldes salvadoreños. El gobierno de Nicaragua ha respondido a estas acusaciones reiterando que ni otorga ayuda material al FMLN ni exporta su revolución a otros países.

Paralelamente, Estados Unidos ha empleado una retórica muy agresiva, al tiempo que presiona por canales diplomáticos y económicos para aislar a Nicaragua y llevar a su economía a la bancarrota.

Estas presiones, combinadas con el patrocinio de acciones encubiertas y actos de espionaje aéreo y naval, tendientes a probar la presencia de tropas cubanas y

armas soviéticas, han provocado un permanente ambiente prebélico.

Fuera del área centroamericana, la política de Reagan hacia América Latina ha encontrado una acogida más bien fría en la mayoría de los gobiernos de la región. Por razones muy distintas, que van desde el recelo hacia las intervenciones estadounidenses hasta posiciones fundadas en principios políticos, los intentos de Reagan de restaurar la hegemonía de su país en el continente no se han concretado.

Vale la pena destacar la posición de México, por ser el país "no enemigo" que con mayor firmeza se ha enfrentado a los anhelos expansionistas de la Casa Blanca. En efecto, México ha padecido invasiones y perdió más de la mitad de su territorio en una injusta y desigual guerra con Estados Unidos. En gran medida, estas experiencias han conformado las bases de la tradicional política mexicana de no intervención y de respeto al derecho de autodeterminación. El gobierno mexicano confía en la estabilidad social y política del país y en su propia capacidad de respuesta ante los inevitables cambios sociales, gracias a las reformas estructurales logradas durante y después de la Revolución de 1910. En consecuencia, se solidariza con los movimientos populares y revolucionarios que luchan por erradicar las causas de la injusticia y por establecer una sociedad equitativa.

Con este respaldo doctrinario, el gobierno mexicano postula que las causas de las convulsiones centroamericanas son las caducas estructuras económicas, sociales y políticas que prevalecen en el istmo. Por ello, en diversos foros ha expresado su solidaridad con la lucha del pueblo nicaragüense y con Cuba, así como su simpatía hacia los esfuerzos de los pueblos centroamericanos por modificar estructuras económicas arcaicas e instituciones políticas dictatoriales y represivas. Asimismo, se ha manifestado contra la intervención en los asuntos internos de cualquier país latinoamericano. Estos principios fueron reafirmados en el comunicado franco-mexicano sobre El Salvador y, posteriormente, en el Acuerdo de San José —suscrito con Venezuela—, que garantiza la ayuda mexicana a las economías centroamericanas. También ha otorgado su cabal apoyo a cualquier iniciativa que conduzca a la pacificación de Centroamérica y a garantizar el derecho de los pueblos a darse el tipo de régimen que garantice su desarrollo económico, con justicia social. □

Ángel Serrano

8. Véase James Petras, "El programa de Reagan para la Cuenca del Caribe. La máscara económica de una política militar", en *Comercio Exterior*, vol. 32, núm. 9, México, septiembre de 1982, pp. 983-985.

9. Véase José López Portillo, "Sexto Informe Presidencial", en *Comercio Exterior*, op. cit.

recuento latinoamericano

Asuntos generales

Propuesta de paz para Centroamérica

Los presidentes de México y Venezuela enviaron el 8 de septiembre una carta al de Estados Unidos, en la que expresaron su preocupación por el deterioro de la situación en Centroamérica; además, le piden que interponga sus buenos oficios para evitar una guerra entre Honduras y Nicaragua. Copias de dicha carta fueron enviadas a los jefes de Estado de Honduras y Nicaragua, exhortándolos a encontrar la mejor forma de frenar "la actual y preocupante escalada, los temores y las peligrosas expectativas generales en cuanto al desenlace de la crisis".

El 17, el gobierno de Nicaragua declaró que la misiva de México y Venezuela constituye un esfuerzo "del más alto nivel que se ha hecho para defenderse de la política impulsada contra la revolución popular sandinista". Agregó que Nicaragua está "en disposición de entablar un diálogo para encontrar la paz en Centroamérica".

No obstante manifestar su acuerdo con la propuesta de paz de México y Venezuela, Roberto Suazo Córdoba, presidente de Honduras, se negó a participar en una reunión con el coordinador de la Junta de Gobierno nicaragüense, Daniel Ortega Saavedra, el 13 de octubre en Caracas.

"Reunión pro paz"

Representantes de 9 países (Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos) se reunieron el 4 de octubre, en San José de Costa Rica, para deliberar sobre los problemas actuales de Centroamérica. La reunión culminó con la creación de un "Foro Pro Paz y Democracia", que trabajará en forma independiente de otros organismos y cuyo objetivo es examinar todas las propuestas de paz que se hayan presentado y se gestionen en el futuro.

Al día siguiente, el gobierno de Nicaragua declaró que "es incomprensible que se pueda hablar de paz en la región sin tomar en cuenta a Managua".

Reunión de la COPPPAL

Durante los días 11 y 12 de octubre se llevó a cabo en La Paz, Bolivia, la décima reunión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), a la cual acudieron representantes de 25 partidos políticos de la región. Al finalizar el encuentro se emitió una declaración con más de 50 resoluciones, entre ellas el respaldo al restablecimiento del sistema democrático en Bolivia; el exhorto a los gobiernos democráticos para que refuercen los mecanismos de cooperación regional; la condena a los regímenes militares, al armamentismo y a todo tipo de intervencionismo en América Latina y el Caribe. También se instó a los gobiernos a adoptar medidas concretas para preservar los derechos humanos, luchar por la descolonización y rechazar la presencia de contingentes militares extranjeros en América Latina, y se formuló un reconocimiento a los gobiernos de México y Venezuela por su propuesta de paz para Centroamérica. □

Productos básicos

Nuevo acuerdo internacional del café

El 17 de septiembre, los países productores y consumidores de café firmaron en Londres un nuevo acuerdo internacional que entrará en vigor el 1 de octubre siguiente y que abarcará los períodos 1982-1983 y 1983-1984. Las nuevas cuotas de exportación se distribuyen según los siguientes porcentajes:

<i>América Latina</i>	70.38
Brasil	30.83
Colombia	16.28
Ecuador	4.48
El Salvador	4.48
México	3.65
Guatemala	3.47
Costa Rica	2.16
Honduras	1.49
Perú	1.31
Nicaragua	1.28
República Dominicana	0.95
<i>Países de África, Asia y Oceanía</i>	29.62

Baja el precio del azúcar

El 15 de octubre se informó que la reducción del consumo de azúcar en los principales países compradores (Estados Unidos y la CEE) propició una súbita baja de su precio en el mercado internacional que, a su vez, afecta duramente a las economías de los principales países productores de América Latina: Cuba, Brasil, Perú y República Dominicana.

El precio del azúcar ha descendido 80% en nueve años. En 1974, el kilogramo valía 66 centavos de dólar en el mercado de Nueva York; actualmente vale 13.2 centavos.

Para hacer frente a esa situación, Cuba ha comenzado a negociar el pago de su deuda externa; Perú ha iniciado estudios para determinar qué hacer con su industria azucarera, y Brasil decidió suspender las negociaciones de nuevos contratos de exportación. Además, este país optó por reducir la elaboración de azúcar y canalizar la cosecha de caña a la producción de alcohol, para usarlo como combustible (en lugar de gasolina) en el sector automovilístico. □

Argentina

Se suspenden las sanciones financieras

El 14 de septiembre, Argentina y Gran Bretaña acordaron levantar las mutuas sanciones financieras impuestas con motivo del conflicto de las Malvinas.

La medida puso en movimiento un monto de 1 800 millones de dólares (1 500 millones de dólares de Argentina en Londres y 300 millones de dólares de Gran Bretaña en Buenos Aires).

Incremento a los salarios

El gobierno militar decretó el 21 de septiembre un aumento extraordinario de 400 000 pesos (9 dólares) al salario de los trabajadores, retroactivo al 1 del mismo mes. Asimismo, se anunció una baja de cuatro puntos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre el precio de los alimentos y medicinas; una desgravación im-

positiva; un proyecto de facilidades para pagos de impuestos y el aumento a 2.8 millones de pesos (65 dólares) del salario mínimo mensual.

Las medidas fueron acompañadas de la advertencia a las centrales sindicales de que se abstengan de efectuar huelgas o de incitar protestas.

Manifestación no reprimida

Más de 20 000 personas, encabezadas por los líderes de la Confederación General del Trabajo-sector Brasil (CGT-Brasil) y de las 62 organizaciones sindicales peronistas, realizaron el 22 de septiembre una manifestación que recorrió las principales calles y culminó frente a la Casa de Gobierno. Durante el recorrido gritaron consignas antigobiernistas, antimilitares y referentes a los desaparecidos.

Al final del acto entregaron un documento al presidente Bignone, en el cual pidieron un aumento salarial, la reactivación del aparato productivo, la derogación de la ley que prohíbe actividades sindicales, el restablecimiento del estado de derecho y la liberación de los detenidos políticos y sindicales, entre otras demandas. □

Bolivia

Siles Suazo asume el poder

Ante la presencia de los presidentes Belisario Betancur, de Colombia, Osvaldo Hurtado Larrea, de Ecuador, y Fernando Belaúnde Terry, de Perú, de representantes de 40 países y de 500 periodistas, Hernán Siles Suazo, dirigente de la Unidad Democrática Popular (UDP), asumió la presidencia de Bolivia el 10 de octubre.

En su discurso de toma de posesión, Siles Suazo declaró que recibía un país en "penosas condiciones" y convocó a la unidad nacional, dentro de "un marco más abierto de una auténtica democracia", en la que tendrán espacio todas las corrientes de opinión, pero en la que será indispensable la unidad de mando y la disciplina. Reiteró que habrá una democracia efectiva, donde los trabajadores "tendrán participación activa en la administración de las empresas públicas" y en donde a las empresas privadas se les otorgarán los incentivos necesarios para su desarrollo.

En su intervención el presidente saliente, general Guido Vildoso Calderón, hizo un llamado a una auténtica reconciliación

entre civiles y militares, y afirmó que "las fuerzas armadas cooperarán lealmente en la búsqueda de soluciones para las necesidades de la sociedad boliviana y de su gobierno".

Tras la ceremonia, Siles Suazo tomó la protesta al nuevo gabinete: su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), tiene ocho carteras; seis son del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), del vicepresidente Jaime Paz Zamora, y dos del Partido Comunista. Los cargos castrenses fueron asumidos por oficiales del denominado "sector institucional" de las fuerzas armadas; ellos son: general Alfredo Villarreal, comandante de las Fuerzas Armadas; general Juan Muñoz, jefe de Aeronáutica; vicealmirante Wilfredo de la Barra, jefe de la Marina, y general Simón Sejas, jefe del Ejército. Por primera vez en 30 años se designó ministro de Defensa a un civil, José Ortiz Mercado.

El gobierno de Siles Suazo tiene un amplio apoyo popular, incluso de la Iglesia católica. Asimismo, el nuevo Presidente recibió manifestaciones de apoyo económico de la Corporación Andina de Fomento, que otorgará 15 millones de dólares a la nueva administración; la CEE concederá un crédito por 150 millones de dólares; el BID anunció un empréstito por 50 millones de dólares a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Bolivianos, y Brasil otorgará una ayuda de 150 millones de dólares. □

Brasil

Presiones contra la venta de armas

El 9 de septiembre se informó que representantes de la empresa brasileña Engensa, productora de armamentos, entregaron un documento al Ministro de Planificación en el cual informan de las presiones que ejerce Estados Unidos, por intermedio de la General Motors, para que aquella empresa reduzca sus exportaciones de material bélico.

Una de esas presiones es la amenaza de la General Motors de suspender la venta de motores con los que la empresa brasileña equipa sus carros blindados, que vende a más de 20 países de África y Medio Oriente.

Dólar turístico

Hennane Galveas, ministro de Hacienda,

anunció el 16 de septiembre que, para frenar la fuga de divisas, el gobierno decretó que los brasileños que viajen al exterior tendrán que pagar 25% más por los dólares que compren.

La medida establece que los menores de 18 años podrán adquirir 250 dólares y los adultos 500 para viajar a países de América Latina, y 2 000 dólares para el resto del mundo. Los que salgan recibirán 100 dólares en cheques de viajero en Brasil y el resto les será enviado por orden de pago al país de destino. Quedan excluidos los exportadores y los funcionarios gubernamentales.

La cotización oficial del dólar es de 201 cruzeiros, para el viajero es de 252 y para el mercado generalizado de 325 cruzeiros. □

Colombia

Reconocimiento oficial del M-19 como grupo político

El 15 de septiembre, el gobierno del presidente Belisario Betancur reconoció al Movimiento 19 de abril (M-19) como grupo político. El ministro de Gobernación declaró que "el M-19 tiene muchas cosas que aportar y otras muchas que decir". Al mismo tiempo, rechazó la tesis de que esa organización forme parte de grupos internacionales.

Un vocero del grupo insurgente señaló: "no esperamos que el presidente Betancur haga la revolución, pero es muy necesario que se establezcan reglas que no obliguen a la vía armada".

Preocupación por la paz social

El presidente Belisario Betancur solicitó al Congreso colombiano, el 20 de septiembre, que apruebe con carácter prioritario la ley de amnistía política general, con el objeto de que los grupos insurgentes renuncien a las armas y se garantice la paz en el país. Señaló que cuanto menos paz se tenga, más se dependerá del exterior y habrá menos posibilidades de proteger y aprovechar los recursos nacionales, activar la economía, generar más empleos, producir bienes y servicios y mejorar el nivel de vida de sus compatriotas.

El M-19 y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dijeron estar dispuestos a iniciar un diálogo con el gobierno para emprender un proceso demo-

crático participativo que se materialice en la estabilidad social. En cambio, el Ejército Nacional de Liberación (ENL) anunció que no depondrá las armas mientras haya descontento social y desigualdad entre los colombianos.

Cambios en la política exterior

El canciller Rodrigo Lloreda declaró el 26 de septiembre que el gobierno conservador de Belisario Betancur llevará a cabo cambios importantes en la política exterior del país, entre los que figura el ingreso de Colombia al Movimiento de Países No Alineados. Al mismo tiempo, el Canciller señaló: "mantendremos una relación cordial con Estados Unidos, pero queremos acabar con la idea de que somos una especie de satélite" de ese país. Agregó que Colombia y Estados Unidos mantendrán buenas relaciones "siempre que persista el mutuo respeto y nos miren como un país que está alcanzando su madurez y que tiene puntos de vista que no siempre coinciden con los de ellos".

Bancos nacionalizados

El 9 de octubre, el presidente Belisario Betancur decretó la nacionalización del Banco del Estado, de propiedad privada, que se encontraba en aguda crisis monetaria debido a los "autopréstamos" que efectuara su director. Asimismo, el Gobierno intervino el Banco Nacional, luego de comprobar irregularidades en su administración. El poder ejecutivo advirtió a las demás instituciones financieras del país que correrán igual suerte si llevan a cabo manejos dolosos con el dinero de los ahorradores. □

Costa Rica

Prolongada huelga bananera

Después de dos meses de huelga, el 21 de septiembre la empresa estadounidense Banana Development Corporation of Costa Rica y los representantes del gobierno costarricense suspendieron las negociaciones con los trabajadores y solicitaron que la huelga sea declarada ilegal.

Las demandas de los trabajadores son, entre otras, la reinstalación de 28 despedidos en julio pasado, un incremento salarial de 17% (adicional al de 33% acordado por el Consejo Nacional de Salarios) y el pago del tiempo no trabajado en el corte de la fruta por causas naturales. □

Cuba

Solicita prórroga al pago de su deuda externa

El presidente del Banco Nacional de Cuba, Raúl León Torras, informó el 22 de septiembre que su gobierno está realizando negociaciones con Argentina, Canadá, España, Francia, Gran Bretaña y Japón, para llevar a cabo una reunión conjunta con los demás países acreedores con el fin de reestructurar el pago de la deuda externa.

El plan cubano propone una moratoria de diez años para las deudas que vencen antes de 1985, que representan 1 300 millones de dólares de un total de 3 500 millones. □

Chile

Mensaje de la disidencia al pueblo chileno

Ante el cerrado sistema de control y represión impuesto por el régimen militar contra manifestaciones de inconformidad, el 4 de septiembre una radioemisora, denominada Radio Libre, interfirió la emisión del canal estatal de televisión durante ocho minutos y difundió un texto de la Brigada Salvador Allende de Comunicaciones.

En dicho texto la Brigada informó, entre otras cosas, que ya afloran serias discrepancias entre la burguesía bancaria y el gobierno de Pinochet, ante la crítica situación económica por la que atraviesa el país, y que existe división en las fuerzas armadas, pues hay militares que ya no creen en la política de Pinochet. También exhortó a los chilenos socialistas a fortalecer la unidad sindical y los organismos de base, a crear conciencia de la crisis y del caos nacional, a propugnar la derogación del estado de sitio y de emergencia, y a "luchar por el pan, el trabajo, la justicia y la libertad".

Se restringe la venta de divisas

A principios de septiembre, y debido a la crisis económica por la que atraviesa el país, el Banco Central restringió la venta de divisas para evitar su salida. Hasta entonces, cada persona que viajaba podía adquirir hasta 10 000 dólares sin dar cuenta de su uso. A partir de la adopción del llamado "dólar viajero", sólo se otorgan 1 000 dólares a quienes viajan a los países

limítrofes y 3 000 a los demás viajeros. El 27 de septiembre, el vicepresidente del Banco, Daniel Tapia, declaró que "al Banco Central no le interesa el precio que alcance la divisa en las transacciones entre particulares; lo único que interesa es cerrar la brecha para evitar la fuga de divisas". □

Ecuador

Demandas populares sin eco

El Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador (FUT) resolvió realizar un paro de 48 horas en demanda de aumento salarial, congelación de precios de artículos de primera necesidad, aplicación total de la ley de Reforma Agraria, estatización del transporte público, promulgación de leyes contra el enriquecimiento ilícito y defensa del consumidor. El 23 de septiembre, después del paro de dos días el ministro de Trabajo Clodomiro Álvarez declaró que no habrá cambios en la política salarial del gobierno. El salario mínimo vigente era de 4 000 sucres mensuales (121 dólares), y el FUT exigía su aumento a 7 000 sucres (200 dólares).

Tres semanas después, el 15 de octubre, el presidente Osvaldo Hurtado anunció un aumento del salario mínimo de 15 dólares, al tiempo que informaba la suspensión de los subsidios al trigo y a los combustibles (más de 680 millones de dólares anuales).

En su discurso, Hurtado señaló que "la magnitud del problema económico ha alcanzado tal gravedad, que ya el gobierno por sí solo no está en posibilidad de resolverlo". Asimismo, el mandatario admitió que el "programa de recuperación" puesto en marcha tendrá agudas repercusiones sociales.

Refinanciamiento de la deuda externa

El 8 de octubre, el gobierno hizo un llamado a la banca internacional para renegociar el pago de 1 220 millones de dólares, programados para el 1 de noviembre próximo y el 31 de diciembre de 1983. Dicho monto representa 26.5% del total de la deuda pública externa, que es de 4 601 millones de dólares.

Descendieron las ventas petroleras

En un informe dado a conocer el 15 de octubre, la Corporación Estatal Petrolera de

Ecuador (CEPE) declaró que las ventas petroleras por contrato a largo plazo disminuyeron 47% y las utilidades 27 por ciento.

Según la CEPE, hasta principios de este año el país tenía contratos con seis compradores, que adquirirían 85 000 b/d de crudo a 34.25 dólares por barril. Actualmente sólo quedan tres de esos compradores, que adquirirían 45 000 b/d a 32.50 dólares por barril. □

El Salvador

Continúa el genocidio

El 7 de septiembre, un grupo de campesinos denunció que tropas del ejército salvadoreño asesinaron a 300 personas desarmadas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, en la provincia de San Vicente. Según los campesinos, los batallones Atlacatl y Ramón Beloso, entrenados en Estados Unidos, atacaron durante siete días con fusiles automáticos, armas pesadas y granadas, con el auxilio de la aviación. Las fuentes del ejército afirman que las víctimas eran guerrilleros muertos en combate.

Más ayuda económica de Estados Unidos

Miembros del gabinete de Álvaro Magaña y el embajador estadounidense firmaron el 23 de septiembre dos convenios por medio de los cuales Estados Unidos otorga al gobierno salvadoreño 78 millones de dólares, destinados a combatir la crisis económica por la que atraviesa el país.

El 28 del mismo mes, Estados Unidos concedió otra ayuda económica a El Salvador, por 1.7 millones de dólares, para la restauración de servicios públicos.

Avance sobre posiciones gubernamentales

La Radio Farabundo Martí, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), informó el 12 de octubre que columnas de insurgentes tomaron las posiciones gubernamentales de Las Mesas, La Joya y El Zapote, en el Departamento de Cabañas, a 71 km al noreste de San Salvador. En ese ataque murieron 15 soldados, cinco resultaron heridos de gravedad y otros cinco cayeron prisioneros. Asimismo, se informó que en dos días el FMLN hizo prisioneros a 64 soldados, cap-

turó 101 armas de guerra y causó 55 bajas al ejército.

Condiciones de los cafetaleros

Para hacer frente a la crisis económica, los productores de café propusieron el 15 de octubre al presidente Álvaro Magaña que se les otorguen líneas de crédito por 120 millones de dólares; que el gobierno adquiera toda la producción del período 1981-1982, y que el Estado devuelva al sector privado la comercialización del grano. Los productores amenazaron no levantar la cosecha 1982-1983 si el gobierno no revisa el precio interno del café, rebaja los impuestos y disuelve el Instituto Nacional del Café (Incafé). El Incafé es un organismo estatal que recauda anualmente unos 140 millones de dólares por concepto de impuestos a la exportación del grano y 128 millones por la diferencia entre el precio interno y el externo. □

Honduras

Secuestran a ministros y empresarios

El 17 de septiembre un comando guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional Cinchonero secuestró en San Pedro Sula a los ministros de Economía, Gustavo Adolfo Alfaro, y de Hacienda, Arturo Coglegto Moreira; al presidente del Banco Central, Gonzalo Carías Pineda, y a unos 200 empresarios, cuando efectuaban una reunión "para analizar los graves problemas sociales, políticos y económicos" del país.

Dos días después, el diario *El Tiempo* publicó ocho demandas de los guerrilleros: derogación de un decreto contra el terrorismo; liberación de 67 presos políticos; cese a la represión contra las organizaciones populares; retiro de Honduras de la llamada Comunidad Democrática Centroamericana (CDC); expulsión de los asesores militares estadounidenses, israelíes, chilenos y argentinos; cese de la intervención del ejército hondureño en El Salvador; desmantelamiento y expulsión de los grupos somocistas, y aplicación de la asistencia militar estadounidense a obras de beneficio social.

El 25 del mismo mes, sin haber logrado sus objetivos, los guerrilleros salieron rumbo a Panamá en un avión de la Fuerza Aérea Panameña, para ser trasladados posteriormente a Cuba, donde habían solicitado asilo político. □

Nicaragua

Dentro de la pluralidad, discuten soluciones

El 3 de septiembre, tras casi dos años de distanciamiento, la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN), que agrupa a los partidos socialcristiano, socialdemócrata y conservador, a dos centrales sindicales y al Consejo Superior de la Empresa Privada, se reunió con el comandante Bayardo Arce, del Frente Sandinista, con el objeto de buscar soluciones a los graves problemas nacionales.

Pacto de no agresión

El 9 de septiembre, el gobierno de Nicaragua propuso al estadounidense la firma de un pacto de no agresión que sienta las bases de un entendimiento. La reunión para materializar el compromiso podría celebrarse en Canadá, Colombia, España, Francia, México o Venezuela, países que han ofrecido su cooperación para solucionar las diferencias entre Nicaragua y Estados Unidos.

En el extenso documento enviado al gobierno estadounidense, Nicaragua reitera su "convicción de que sólo a través del diálogo sincero y sin precondiciones entre nuestros dos gobiernos, estaremos contribuyendo efectivamente al establecimiento de bases sólidas para una paz duradera, elemento esencial para la estabilidad y el progreso de nuestros pueblos".

Crédito al sector eléctrico

El BID otorgó al gobierno nicaragüense un empréstito por 34.4 millones de dólares, destinado a la construcción de un proyecto hidroeléctrico. □

Uruguay

Tributo del viajero

El 8 de septiembre el gobierno militar instituyó un impuesto a los viajeros al exterior. Para quienes vayan a Argentina o Brasil el impuesto será de 200 pesos (15 dólares) y de 300 (23 dólares) para los demás viajeros.

El mencionado gravamen tiene por objeto reducir las compras que, aprovechando las diferencias del tipo de cambio, hacían los ciudadanos uruguayos en los países vecinos, así como recaudar fondos para el pago de sueldos del sector público. □